

**Asamblea General**

Distr. general
19 de octubre de 2012
Español
Original: inglés

Sexagésimo séptimo período de sesiones
Tema 141 del programa
Administración de justicia en las Naciones Unidas

**Carta de fecha de 10 de octubre de 2012 dirigida al Presidente
de la Asamblea General por el Secretario General**

Tengo el honor de transmitir adjunta una carta de fecha 4 de octubre de 2012 que recibí del magistrado Vinod Boolell, Presidente del Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas (véase el anexo), a la que se acompañan dos apéndices por los que se comunican las observaciones de los magistrados de ese Tribunal sobre las recomendaciones que figuran en el informe del Consejo de Justicia Interna (A/67/98) y mi informe sobre la administración de justicia en las Naciones Unidas (A/67/265) en relación con el tema 141 del programa de la Asamblea General titulado “Administración de justicia en las Naciones Unidas”.

El magistrado Boolell solicita tenga a bien distribuir dicha carta y sus apéndices como documento de la Asamblea General.

(Firmado) **BAN** Ki-moon



Anexo

**Carta de fecha 4 de octubre de 2012 dirigida al Secretario General
por el Presidente del Tribunal Contencioso-Administrativo de las
Naciones Unidas**

Tengo el honor de dirigirme a Ud. en nombre de los magistrados del Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas con objeto de transmitir nuestra preocupación respecto de algunas observaciones y recomendaciones que figuran en el informe del Secretario General (A/67/265) y el informe del Consejo de Justicia Interna (A/67/98) en relación con el tema 141 del programa de la Asamblea General titulado “Administración de justicia en las Naciones Unidas”. Adjunto dos documentos que contienen en pocas palabras las observaciones de los magistrados del Tribunal Contencioso-Administrativo sobre los informes mencionados (véanse los adjuntos I y II).

Agradecería que tuviera a bien comunicar la presente carta y sus adjuntos al Presidente de la Asamblea General para que sean transmitidos a la Sexta Comisión y distribuidos como documento en relación con el tema 141 del programa.

(Firmado) Vinod **Boolell**

Presidente

Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas

Apéndice I

Administración de justicia en las Naciones Unidas

Observaciones de los magistrados del Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas respecto de las recomendaciones que figuran en el informe del Consejo de Justicia Interna

1. Tras examinar la cuestión con cuidado y deliberar detenidamente sobre ella, los magistrados del Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas han llegado a la conclusión de que es su obligación para con la Asamblea General, como jueces independientes, transmitir su opinión sobre algunas de las cuestiones que figuran en el informe del Consejo de Justicia Interna (A/67/98) en relación con el tema 141 del programa y la labor del Tribunal.

2. Los magistrados están especialmente preocupados por las observaciones formuladas en relación con el mecanismo de queja relativas a los magistrados y la referencia que se ha hecho a un caso de presunta mala conducta de un magistrado en ejercicio.

Mecanismo de queja

3. En el párrafo 14 de su informe, el Consejo de Justicia Interna recomienda que tres juristas externos, miembros del Consejo, resuelvan las reclamaciones que se formulen contra los magistrados.

4. Los magistrados recuerdan que en una carta de fecha 7 de octubre de 2011 (A/66/507) dirigida al Presidente de la Asamblea General por la magistrada Mamooda Ebrahim-Carstens, en su calidad de Presidente del Tribunal Contencioso-Administrativo, los magistrados expresaron su opinión de que esas reclamaciones debían ser examinadas por un grupo integrado por el Presidente y dos magistrados del Tribunal Contencioso-Administrativo. Los magistrados explicaron que la composición del Consejo de Justicia Interna, que incluye a representantes del personal y de la administración, lo descalificaba para esa tarea y que además, el órgano responsable de seleccionar y recomendar candidatos a la Asamblea General para su nombramiento como magistrados no debería desempeñar un papel clave en el procedimiento de reclamación.

5. Los magistrados observan con preocupación que, a pesar de ello, el Consejo de Justicia Interna ha vuelto a insistir con la misma recomendación. Los magistrados sostienen que dichas reclamaciones deben ser resueltas por los propios magistrados. La inquietud a la que hace referencia el Consejo de que la queja formulada contra un magistrado, si fuera sustanciada por sus colegas, podría generar una percepción de parcialidad, no es pertinente, dado que se trata de una práctica que existe en numerosas jurisdicciones nacionales e internacionales, entre ellas, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, la Corte Internacional de Justicia y varios tribunales administrativos regionales e internacionales.

6. Los magistrados observan con gran preocupación y decepción que el Consejo de Justicia Interna hace alusión, en el párrafo 12 de su informe, a una queja por presunta mala conducta por parte de un magistrado en ejercicio, a los efectos de

explicar la necesidad de un mecanismo para resolver cuestiones de esa índole. La queja a que hace referencia el Consejo no fue nunca investigada adecuadamente por este, ni se dio al magistrado en cuestión la oportunidad de responder a las alegaciones formuladas. El ejemplo proporcionado por el Consejo, en lo sustancial, si se tiene en cuenta que este órgano carece de facultades para entender en esa reclamación, y que la misma fue examinada exhaustivamente por el Presidente del Tribunal Contencioso-Administrativo, significa una violación flagrante e injustificada de las normas de la justicia natural. Los magistrados objetan enérgicamente al párrafo 12 del informe.

Magistrados *ad litem* y en régimen de dedicación parcial

7. En el párrafo 24 del informe, el Consejo de Justicia Interna recomienda que se podría evitar la necesidad de contratar a un magistrado en régimen de dedicación parcial si se presupuestara ese gasto sobre la base del 75% del costo de un magistrado de dedicación exclusiva, lo que permitiría a los jueces de dedicación parcial destinar más de seis meses por año al Tribunal Contencioso-Administrativo.

8. Los magistrados consideran que deben extremarse los recaudos en este respecto. Los magistrados han propugnado que exista un magistrado de dedicación exclusiva en cada Sede del Tribunal, lo que se menciona en el párrafo 22 del informe. Asignar más recursos a los magistrados de dedicación parcial podría hacer peligrar en el largo plazo el nombramiento de otro magistrado de dedicación exclusiva en cada Sede.

9. En el párrafo 21 de su informe, el Consejo de Justicia Interna mantiene su opinión de que no es conveniente renovar continuamente el mandato de los magistrados *ad litem*. En el clima de incertidumbre actual, la alternativa de contratar a un nuevo magistrado de dedicación exclusiva en cada Sede, sería prorrogar durante al menos dos años el mandato de los magistrados *ad litem* pero sin realizar cambios a las condiciones de servicio de los magistrados de dedicación parcial.

Simposio internacional sobre la labor de los Tribunales

10. En el párrafo 43 del informe del Consejo de Justicia Interna, se señala lo siguiente:

El Consejo de Justicia Interna, y en particular su Presidencia, trabajó en colaboración con la Universidad Brandeis, de los Estados Unidos de América, que cuenta con un programa de formación de magistrados internacionales muy reconocido, y con la Facultad de Derecho de Osgoode, del Canadá, que tiene una gran reputación en capacitación jurídica, para organizar un simposio con los magistrados de las Naciones Unidas acerca del funcionamiento del sistema de justicia interna. Sin embargo, hubo que abandonar el proyecto, lo cual supuso una enorme decepción para el Consejo.

11. Los magistrados, si bien concuerdan plenamente con que se desaprovechó una oportunidad al no organizarse el simposio, verían con agrado participar en un simposio de esa índole en el futuro. Los magistrados proponen que la Presidencia del Consejo de Justicia Interna y el Presidente del Tribunal Contencioso-Administrativo examinen la cuestión en la primera oportunidad que se presente a fin de que los magistrados del Tribunal puedan sacar el mayor provecho posible.

Código de conducta de los abogados o representantes letrados

12. Los magistrados observan que el Consejo de Justicia Interna propone en su párrafo 44 la elaboración de un código que regule la conducta de los abogados externos y representantes letrados que actúan ante el Tribunal Contencioso-Administrativo. El código propuesto no regularía la conducta de los letrados que representan al Secretario General en el caso de que estos fueran funcionarios de las Naciones Unidas, y se basaría en la premisa de que la conducta de los funcionarios que actúan ante el Tribunal se regirá por el Estatuto y Reglamento del Personal.

13. Los magistrados opinan que el código propuesto sería totalmente inadecuado e inapropiado. La conducta de los funcionarios que representan al Secretario General o a quien interponga una reclamación debería estar regulada por el mismo código de conducta que regula la conducta de un asesor externo. No debería haber dos categorías de letrados o representantes que actúen ante el Tribunal.

14. No existe ninguna disposición en el Estatuto ni en el Reglamento del Personal que habilite al Tribunal Contencioso-Administrativo a adoptar o recomendar la adopción de medidas contra un funcionario que represente al Secretario General ni contra quién interponga una reclamación, salvo cuando se remita una causa a los efectos de asegurar la rendición de cuentas. Si los letrados o representantes fueran funcionarios de las Naciones Unidas, el Tribunal Contencioso-Administrativo se vería impedido de asegurar el cumplimiento de sus normas disciplinarias o de ética profesional si se excluyera a esos funcionarios del ámbito de aplicación del código de conducta. Un código que establece la conducta ética que debe tenerse al actuar ante un tribunal no se asemeja a los estatutos o reglamentos que regulan las condiciones de servicio de los funcionarios. Un magistrado debe estar en condiciones, si va a aplicar un código de conducta, de tomar las medidas adecuadas con celeridad, si un letrado comete una falta de conducta ética, sin tener que recurrir al prolongado proceso de rendición de cuentas.

15. La experiencia ha mostrado que es muy difícil, e incluso imposible, lograr la adopción de medidas eficaces respecto de los funcionarios, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.8 del estatuto del Tribunal Contencioso-Administrativo, en lo que respecta a la rendición de cuentas. En el caso de los letrados o representantes que sean funcionarios, el Tribunal Contencioso-Administrativo no podrá aplicar normas disciplinarias o éticas si se excluye a esos funcionarios del ámbito de aplicación del código de conducta.

Apéndice II

Administración de justicia en las Naciones Unidas

Observaciones de los magistrados del Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas respecto de las recomendaciones que figuran en el informe del Secretario General

Mecanismos para abordar las posibles faltas de conducta de los magistrados

1. El Secretario General formula sus recomendaciones en el anexo VII, sección B, párrafos 2 y 3, de su informe (A/67/265).

2. En el párrafo 2, el Secretario General señala lo siguiente:

En sus informes que figuran en los documentos A/63/314 y A/66/275 y Corr.1, el Secretario General propuso que las denuncias respecto de falta de conducta o incapacidad de los magistrados del Tribunal Contencioso-Administrativo o del Tribunal de Apelaciones deben ser informadas al Presidente de Tribunal pertinente. Después de recibir esa denuncia y de realizar un examen preliminar, el Presidente establecerá un panel de expertos para investigar las denuncias e informar de sus conclusiones y recomendaciones al Tribunal. Todos los magistrados del Tribunal, excepto el investigado, examinarán el informe del panel. De haber una opinión unánime en el sentido de que la denuncia de falta de conducta o incapacidad está bien fundada y cuando el asunto sea lo suficientemente grave como para sugerir se justificaría la destitución del magistrado, asesorarán en tal sentido al Presidente del Tribunal, que informará del asunto a la Asamblea General y solicitará la destitución del magistrado. Cuando se determine que la denuncia de falta de conducta o incapacidad está bien fundada, pero no es suficiente para justificar la destitución del magistrado, el Presidente estará autorizado a adoptar las medidas correctivas que proceda. Entre esas medidas correctivas podrá incluirse una amonestación o una advertencia. Posteriormente, el Presidente presentará a la Asamblea General un informe sobre la resolución de las denuncias. Los tipos de falta de conducta que justificarían sancionar a un magistrado serían violaciones del código de conducta de los magistrados o violaciones del Estatuto relativo a la condición y los derechos y deberes básicos de los funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los expertos en misión, según se establece en el boletín del Secretario General ST/SGB/2002/9.

3. En el párrafo 3 de esa sección, el Secretario General justifica su recomendación:

La propuesta del Secretario General se adecua a la práctica de varias organizaciones internacionales. El Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el anterior Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas establecen en sus estatutos que la decisión de destituir a un magistrado exige el acuerdo de todos los demás magistrados del tribunal. Del mismo modo, se necesita la concurrencia de una mayoría de los magistrados para destituir a un magistrado con arreglo al

estatuto de la Corte Penal Internacional y el del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. Además, la propuesta de que el tribunal que examina la denuncia contra un magistrado pueda adoptar medidas correctivas, como una amonestación o advertencia, está reconocida en los sistemas judiciales de varios Estados Miembros.

4. Los magistrados aprueban y apoyan plenamente dicha recomendación, dado que tiene el mérito de asignar a los magistrados la responsabilidad de entender en los casos de falta de conducta o incapacidad de sus pares. Sin embargo, destacan también que se los debería consultar cuando se estudien los detalles del mecanismo de queja.

Código de conducta para letrados o representantes de los litigantes

5. Los magistrados observan que el Secretario General, en el Anexo VIII del informe propone que debería existir un código de conducta para los representantes letrados que no son funcionarios. En el informe se justifica esta recomendación sobre la base de que los funcionarios que actúan ante el Tribunal Contencioso-Administrativo ya se encuentran sujetos a un marco regulatorio como funcionarios internacionales. El Secretario General se refiere a la norma vigente que otorga facultades al Tribunal Contencioso-Administrativo para remitir las causas que correspondan al Secretario General o a los jefes ejecutivos de los fondos y programas de las Naciones Unidas administrados separadamente, a fin de que puedan tomar medidas para exigir las responsabilidades que procedan.

6. Los magistrados opinan que el código propuesto sería inadecuado e inapropiado. La conducta de un funcionario que representa al Secretario General o a quien interponga una reclamación debería estar regulada por un mismo código de conducta. No debería haber dos categorías de letrados o representantes que actuaran ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas. En muchas jurisdicciones, los letrados contratados por el Estado se rigen por las normas aplicables a la administración pública, así como por el código de conducta aplicable a todos los letrados.

7. No hay ninguna disposición en el Estatuto o Reglamento del Personal que otorgue facultades al Tribunal Contencioso-Administrativo para adoptar o recomendar la adopción de medidas contra un funcionario que represente al Secretario General ante el Tribunal, salvo cuando se remita una causa a los efectos de asegurar la rendición de cuentas. Un código que establece la conducta ética que debe tenerse al actuar ante un tribunal de justicia no se asemeja a los estatutos o reglamentos que regulan las condiciones de servicio de los funcionarios. Un magistrado debe estar en condiciones, si va a aplicar un código de conducta, de tomar las medidas adecuadas con celeridad, si un letrado comete una falta de conducta ética, sin tener que recurrir al prolongado proceso de rendición de cuentas.

8. La experiencia ha mostrado que es muy difícil, si no imposible, lograr la adopción de medidas eficaces respecto de los funcionarios, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.8 del Estatuto del Tribunal Contencioso-Administrativo en lo que respecta a la rendición de cuentas. En el caso de los letrados o representantes que sean funcionarios, el Tribunal Contencioso-Administrativo no podrá aplicar normas disciplinarias o éticas si se excluye a esos funcionarios del ámbito de aplicación del código de conducta.